

El boom del esquisto en Colombia podría terminar antes de empezar

By Noticias de Israel — 24 horas Ago



Plataforma de perforación de petróleo y gas en tierra firme con un dramático paisaje de nubes. Operación de la plataforma de perforación petrolera en la industria del petróleo y el gas.



La controvertida técnica de extracción de crudo, la fracturación hidráulica, ha sido promocionada durante mucho tiempo como una solución a la rápida disminución de las reservas de petróleo de Colombia. El país latinoamericano, asolado por las luchas, terminó el año 2021 con unas reservas probadas de crudo de 1.800 millones de barriles, que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia estimó suficientes para poco más de seis años con el ritmo de producción de petróleo posterior a la pandemia. Esto es muy preocupante para la economía colombiana, que depende del petróleo, ya que este es responsable de generar un tercio de los ingresos por exportación, una quinta parte de los ingresos del gobierno nacional y más del 3 % del producto interior bruto. Aunque Bogotá ha dedicado considerables recursos a promover el fracking en Colombia, especialmente después de que el boom del fracking en Estados Unidos despegara realmente, para atraer la inversión necesaria la oposición interna a la técnica de extracción de petróleo es feroz. Eso ha actuado como un considerable elemento disuasorio para la inversión privada en la exploración de petróleo y gas natural no convencional en Colombia.

Desde 2018 está vigente en Colombia una prohibición temporal del fracking, aunque el fallo emitido por el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo del país, no bloquea los proyectos piloto. Eso le dio al gobierno nacional, incluyendo el ministerio de energía, el regulador de la industria, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la compañía petrolera nacional Ecopetrol, una esperanza considerable de que el fracking finalmente se permita. Por ello, Ecopetrol puso en marcha dos proyectos piloto de fracking, el de Kale y el de Platero, situados en la cuenca de los Llamos, cerca de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Sin embargo, los últimos acontecimientos apuntan a un deterioro de la licencia social de la industria petrolera colombiana, especialmente porque la oposición de la comunidad al fracking sigue siendo firme, lo que podría hacer que la controvertida técnica de extracción de petróleo se prohibiera en Colombia. Esto no podría llegar en peor momento para la industria petrolera del país latinoamericano, que está luchando por reactivarse después de la pandemia y sigue siendo afectado por el aumento del riesgo geopolítico. Estos riesgos se magnifican aún más porque 2022 es un año de elecciones presidenciales.

Si se prohíbe permanentemente el fracking en Colombia, existe la posibilidad de que ese acontecimiento desencadene considerables consecuencias para la economía colombiana dependiente del petróleo. La hostilidad hacia el fracking en el país andino, desgarrado por los conflictos, es inmensa. Muchos grupos comunitarios temen que tenga un fuerte impacto medioambiental en las regiones donde se permite el fracking, que se verá magnificado por la falta de supervisión y regulación adecuadas. El fracking en jurisdicciones más desarrolladas y fuertemente reguladas como la de Estados Unidos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, o USGS, los principales peligros medioambientales asociados específicamente al fracking son la degradación de las aguas superficiales y subterráneas debido al vertido de líquidos residuales y la sismicidad inducida. El fracking utiliza grandes cantidades de agua, y se calcula que un pozo norteamericano medio consume entre 1,5 y 16 millones de galones de agua a lo largo de su vida. Esta agua suele proceder de aguas subterráneas y superficiales. Los productos químicos utilizados en la fracturación hidráulica son nocivos y a menudo cancerígenos, por lo que su eliminación segura es una actividad precaria. La naturaleza tóxica de los productos químicos utilizados para la fracturación hidráulica significa que los enormes volúmenes de agua utilizados como parte crucial del proceso son peligrosos de eliminar y suponen un riesgo significativo para el medio ambiente. Por esta razón, las aguas residuales de la fracturación hidráulica suelen almacenarse en las profundidades del subsuelo, lo que las aleja del ciclo del agua dulce y afecta a los recursos hídricos locales.

Son estos motivos los que han generado una considerable hostilidad a la fracturación hidráulica en Colombia, que es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo después de Brasil. Una característica clave de la resistencia al fracking en Colombia son los temores entre los 40 grupos de oposición que conforman la organización paraguas Alianza Colombia Libre de Fracking de que la técnica agote y contamine las reservas de agua dulce. Estas preocupaciones son también la base de la considerable oposición al fracking por parte de varios grupos comunitarios locales. Los grupos comunitarios del municipio de San Martín, en el departamento del Cesar, una localidad rica en potencial de petróleo de esquisto, se resistieron a la puesta en marcha de un proyecto de fracking propiedad de ConocoPhillips. La férrea oposición se centró en el temor al agotamiento de los recursos hídricos y a la contaminación por la operación de fracturación hidráulica en la región.

También surgió una importante resistencia al fracking en el municipio de Puerto Wilches, donde Ecopetrol, con su socio ExxonMobil, tiene dos proyectos piloto de fracking, Kale y Platero. A finales del mes pasado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia ambiental de Kale. El proyecto de Kale cuenta con la oposición de un grupo comunitario afrocolombiano, conocido como Afrowilches, que afirma que Ecopetrol no les consultó adecuadamente, tal y como exige la legislación colombiana. La perforación en Kale, cuyo inicio estaba previsto para julio de 2022, tiene pocas probabilidades de seguir adelante, ya que el Juzgado Primero de lo Contencioso-Administrativo de Barrancabermeja ordenó la suspensión de los pilotos de fracking de Kale y Platero.

El tribunal consideró que Ecopetrol había seguido adelante con el proyecto de Kale y que las licencias requeridas fueron concedidas por organismos gubernamentales sin llevar a cabo una consulta adecuada con la comunidad afrowilches, tal y como exige la legislación colombiana. El tribunal también suspendió el proceso de concesión de licencias ambientales para el proyecto piloto Platero. No está claro cómo procederá exactamente Ecopetrol con los proyectos, pero la compañía petrolera nacional de Colombia anunció que tenía la intención de cumplir con las instrucciones dadas por el tribunal y trabajar en el inicio de las operaciones en los pilotos. A raíz de la decisión se ha producido un notable aumento de la violencia y las amenazas contra las actividades medioambientales en Puerto Wilches. Se trata de un hecho preocupante, ya que Colombia está clasificada como el país más peligroso a nivel mundial para los defensores del medio ambiente, con 65 activistas asesinados en el país de la violencia durante 2020. Cualquier escalada de violencia contra los activistas medioambientales en Colombia galvanizará una mayor resistencia al fracking y acelerará el deterioro de la licencia social de la industria petrolera, que es económicamente vital.

En consecuencia, se teme que la decisión impida el desarrollo de los pilotos de fracking, lo que supondría el fin del fracking en Colombia.

El tiempo se acaba para la industria petrolera colombiana. No solo la escasez de reservas probadas indica que la producción terminará en aproximadamente seis años, sino que el principal candidato presidencial, el senador Gustavo Petro, que está en contra del fracking, planea poner fin a la exploración de petróleo en Colombia si es elegido presidente en mayo de 2022. Esto tendrá un fuerte impacto en la economía dependiente del petróleo del país, causando un menor crecimiento y afectando a las arcas del gobierno, ya que el petróleo es responsable del 3 % del producto interno bruto, alrededor de una quinta parte de los ingresos fiscales y el 33 % de las exportaciones en valor.

Matthew Smith es el corresponsal de Oilprice.com en América Latina. Matthew es un veterano inversor y profesional de la gestión de inversiones. Es licenciado en Derecho y actualmente se encuentra en América Latina. Matthew escribe sobre petróleo y gas, minería e infraestructuras.